COMPROMISO MULTIPARTIDARIO SOBRE EMPRESAS PÚBLICAS

Convencidos que las empresas públicas tienen un papel macroeconómico importante, ya que atraen altos montos de inversión y producen una proporción significativa del total de bienes y servicios, y que pese a los esfuerzos tendientes a mejorar diversos aspectos de la gestión, no se han podido superar aún los problemas de coordinación entre diversas áreas y las limitaciones y debilidades institucionales que conspiran contra la capacidad estatal para un desarrollo económico y social activo, equitativo, sostenido e inclusivo, los Partidos Políticos con representación parlamentaria, se comprometen a adoptar medidas para alcanzar un Estado eficiente, eficaz, descentralizado, transparente y que tenga como centro y foco de atención al ciudadano.

No se trata de más o menos Estado. Se trata de poner a disposición de los ciudadanos un Estado mejor.

En ese sentido, y sin perjuicio de otras medidas, acuerdan impulsar las siguientes:

1. Mejorar el control sobre las entidades paraestatales y empresas de derecho privado de propiedad de organismos estatales.

Otorgando al Tribunal de Cuentas de la República, a la Auditoría Interna de la Nación y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto potestades en la materia y estableciendo un sistema de evaluación permanente que emita políticas orientadoras de desempeño y permita establecer criterios evaluadores de la gestión, estableciendo indicadores vinculados con la eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, excelencia y que asegure el encauzamiento de los servicios que prestan y/o negocios que desarrollan en el marco del principio de especialidad consagrado en el artículo 190^o de la Constitución de la República. Dicho sistema deberá prever la emisión de un dictamen vinculante de gestión, que será enviado al Parlamento, sin cuya aprobación no podrá darse trámite al Presupuesto Anual de cada empresa pública.

2. Transparencia en la información de la Administración pública y las empresas estatales o de propiedad estatal.

- Dar mayor publicidad a las resoluciones del Tribunal de Cuentas, de manera que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión sobre el desempeño de los diferentes jerarcas del Estado.
- Crear, en la órbita de Presidencia de la República, una Unidad de Seguimiento que estudiará las observaciones del Tribunal a los efectos de informar al Poder Ejecutivo para que evalúe hacer uso de las facultades de observar o suspender los actos administrativos, previstas por el artículo 197^o de la Constitución.
- Sumar a los controles de legalidad existentes, una evaluación de la calidad de la gestión, incluyendo la evaluación de los resultados económicos, a través de un sistema de auditoría interna de la gestión

gubernamental, que asegure una metodología uniforme de trabajo y que brinde información a los legisladores y responsables de unidades o servicios. De esta forma se contará con elementos de juicio confiables para hacer seguimiento de procesos, corregir desvíos en relación a las metas fijadas y tener capacidad de respuesta en tiempo real ante cualquier deterioro.

- Fortalecer y dotar de mayor autonomía funcional a la Contaduría General de la Nación (CGN), la Auditoría Interna de la Nación (AIN) y la Junta de Transparencia y Ética Pública y la Unidad de Acceso a la Información Pública como controladores externos con Gerentes con dedicación exclusiva y sujetos a evaluación por metas.
 - Asegurar una correcta aplicación de la ley de Acceso a la Información Pública, evitando atrasos o la entrega de información incompleta, estableciendo expresamente los requisitos para declararla de carácter reservado.
 - Para que los pedidos de informes de los legisladores no queden sin respuesta, o sean respondidos con demora, se promoverá que se considere falta grave la ausencia de respuesta a un pedido de informes dentro del plazo establecido por la Ley 17.673.
- 3. Prohibición de realizar publicidad, durante los seis meses anteriores a las elecciones nacionales, a las empresas públicas y privadas de propiedad estatal.**
 - 4. Prohibir la publicidad a las empresas estatales monopolísticas y de productos y/o servicios monopolísticos.**
 - 5. Fortalecer las funciones de dirección y conducción de la Administración Central y las Empresas Públicas, a través de una mayor y mejor capacitación de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de la fijación de metas por desempeño, que tiendan a profesionalizar la función pública en general.**

A tales efectos se promoverá un vasto plan de capacitación con la dirección de la Oficina Nacional del Servicio Civil y el fortalecimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), adecuándola a las necesidades diferenciales de la Administración Pública para una mejor prestación y dignificación del rol de los funcionarios.

Se promoverá, además, en el marco de la ley, la movilidad horizontal y vertical, comenzando por las empresas públicas a fin de aprovechar del mejor modo posible las disponibilidades de personal.

- 6. Universalizar la racionalización de los trámites burocráticos, eliminando rigideces, superposiciones y demoras que perjudican a los usuarios y clientes.**

Incorporar definitivamente el expediente electrónico y trámites y servicios en línea, a través del uso intensivo de la tecnología para mejorar la atención al público.

7. **Continuar con la unificación y centralización de las compras estatales**, que incluya a la Administración Central, Empresas Públicas y Gobiernos Departamentales y Municipales, a través de acuerdos marco con proveedores, la uniformización de contratos de suministro y el desarrollo de tecnologías que permitan combinar la autonomía en las decisiones con los beneficios de la compra unificada.